

DISEÑO Y MORFOLOGIA EN EL URBANISMO ESPAÑOL

Antonio Fernández Alba

Consideración preliminar

EN la compleja y contradictoria situación que la arquitectura y el urbanismo sufren en nuestro país, pretender acometer desde un comentario descriptivo un tema tan preciso como aquel que analiza los factores formales del ambiente urbano y su diseño puede parecer una ingenuidad de «amateur». Mi comentario se marginará a ofrecer al lector algunas consideraciones deducidas de una realidad elocuente, sin introducir ningún proceso de análisis «morfológico-estructural», que saldría de las intenciones de la publicación y que nos llevaría a unas consideraciones estrictamente técnicas del tema.

Valoraremos en cierto modo aquellos «criterios de decisión» que formulan un auténtico prediseño o diseño integral, el campo de decisiones del diseñador urbano, los factores condicionantes de este diseño, la forma como imagen y respuesta a los criterios de decisión, en contradicción con las demandas de la realidad. El solo enunciado de estos apartados nos lleva a mantener una visión crítica, en orden a dos razones fundamentales: a nadie se le oculta, porque lo sufre en el entorno vital de su actividad diaria, este cúmulo de exequias que nos ha legado una política urbanística centralizadora en «usos y funciones», centralización que ha creado una auténtica «entropía regional», cuya degradación de recursos y energías planificadoras será irremediable si no se realiza un diagnóstico riguroso y se trata de potenciar unos canales para la acción de una política urbanística coherente. En otro orden de valores, la llegada a la estructura técnico-política del urbanismo de algunos profesionales con clara conciencia de los problemas y conocimiento de los mismos nos hace albergar (es casi una necesidad nacional) «fundadas esperanzas». Estas breves consideraciones críticas por diagnóstico a través de la forma, esperamos que sean recibidas como una necesidad implícita en todo proceso que trata de configurar una acción de política planificatoria seriamente comprometida con la realidad.

vez están controlados por las estructuras económicas que garantizan estos grupos. Economías dirigidas de Estado, o economías dirigidas y controladas por los grupos de presión. En los primeros los criterios planificatorios responden a una tipología formal «dirigista-centralista», modelos abstractos, apoyados en hacer patente y con gran énfasis el aspecto social del diseño. Tipologías de un marcado carácter paternalista que ofrecen soluciones sin ningún análisis previo. En los segundos, apoyados en un interés básicamente de lucro, con una tipología liberal, opta por soluciones de una total falta de planificación, responde a una economía de mercado y es en función de esta economía la que dirige los modelos a configurar.

En nuestro país, los criterios de decisión han sido alternativos en lo que respecta a materia de urbanismo, sin unos conocimientos científicos de esta materia (resulta preciso señalar que en la actualidad no existe ninguna facultad que canalice estos estudios; algunas asignaturas de urbanismo se cursan en las escuelas de arquitectura, de forma ilustrativa, hacia el complejo campo de la ciencia urbana), sin una legislación precisa de cometidos, la alternativa fue optar por una planificación centralista en cuanto a criterios de decisión y una implicación de la «iniciativa privada», que en paralelo configura su propia dinámica planificatoria. En realidad esta planificación centralista iba a dar origen a una política urbanística totalmente contradictoria. En esencia formulaba las bases de un «urbanismo patrimonial», en lugar de ofrecer las bases de una «planificación regional», potenciando las áreas regionales, planificación que hubiera favorecido, sin lugar a dudas, una política de urbanismo «nacional».

Este urbanismo «patrimonial» configuraría su modelo formal según el origen de donde extraía su capital. El capital que favorecía el «urbanismo patrimonial-estatal» lo traduciría en unas tipologías de tipo paternalista-proteccionista, intentaba llegar y solucionar aquellas situaciones donde la iniciativa privada nunca se acercó, porque sus intereses estuvieron siempre más cerca de una rentabilidad inmediata. La acción del urbanismo estatal trataba de recoger los graves problemas de la emigración rural, de la formación de los nuevos núcleos industriales, de los traumas de las grandes metrópolis. La política contra el chabolismo, los poblados de absorción, las unidades de absorción vecinal, los grandes conjuntos urbanos estatales... fueron los modelos donde el Estado trató de competir y cubrir un mercado al que la política del «urbanismo patrimonial de la iniciativa privada» o de los grupos de presión nunca le sedujo, pues la dinámica del urbanismo privado absorbía su propio mercado con un proteccionismo oficial que hoy, cuando esto ya es historia, se nos presenta dramático. Los modelos que configuraba el urbanismo patrimonial de la iniciativa privada ofrecían una gama diversa y en orden también a la extracción del capital. En las primeras fases su capital eminentemente agrícola respondía a inversiones menores, introduciendo sus modelos en las grandes ciudades de fuerte emigración, capital

Los criterios de decisión como factores de control del diseño urbano

ES un hecho reconocido que los criterios de decisión en las estructuras modernas de poder vienen canalizados por los mecanismos ideológicos que sustentan los grupos políticos de la minoría, que a su

que absorbería las primeras fases de un urbanismo que en alguna ocasión hemos definido de «prótesis urbana», casas entre medianerías, solares existentes del crecimiento interrumpido en las grandes ciudades por la guerra civil, remodelación de los ensanches, etcétera.

EL capital que entraba en juego de los grupos de alta y media burguesía configuraba un capital de estructura liberal, que formularía unas operaciones a nivel urbano de un grado mayor de inversión, pero sin atacar los grandes conjuntos urbanos. Los modelos que simularía este tipo de inversión eran fundamentalmente inmobiliarios, mercado de vivienda para la alta burguesía y clase media y nuevos profesionales liberales, que reclamarían una tipología formal de una estructura urbana similar a los ensanches del XIX, siendo los modelos más cercanos las grandes manzanas del Plan Cerdá en Barcelona y el modelo más reducido que formuló en Madrid el marqués de Salamanca. La doble crujía aún no aparecía como esquema de vivienda modelo, que iba a llenar en la década 55-65 toda la tipología del urbanismo en bloques. Mercado mantenido y promocionado por la entrada en escena de un capital más concentrado, que aglutinaba los grupos de presión y la Banca como promotores de un urbanismo patrimonial de iniciativa privada.

Esta nueva promoción necesitaba de un programa y unos esquemas seudoplanificatorios para abordar la complejidad de los grandes conjuntos, donde ya no tendría opción la adición de bloques sin una estructura viaria, infraestructura de servicios y dotación de una serie de servicios (escuelas, centros asistenciales, pequeños grupos comerciales, etc.). Entraban en acción los planes reguladores, un urbanismo zonal daba paso a configurar modelos urbanísticos sin la traba de los pequeños solares. Este urbanismo compartimentado englobaría las grandes contradicciones que llevaba implícitas una política sectorial de alojamiento, como base para soportar el salto económico que el país necesitaba al encaramarse en los preámbulos de la industrialización como programa nacional.

En el fondo asistíamos a una lectura, por medio de los mapas catastrales, donde se reseñaba el paso de unos minifundios urbanos de la pequeña propiedad a la concentración progresiva del capital en los potentes grupos de presión. Ha sido el geógrafo social Tricart quien ha señalado con bastante agudeza que el análisis del contrato en el diseño de los solares confirma la existencia de la lucha de clases. La estructura de nuestras ciudades iba a sufrir una profunda transformación, el valor del suelo cobraba una dinámica difícil de controlar con una planificación zonal, mientras los urbanistas o improvisados arquitectos y algún que otro incipiente economista formulaban modelos en brillantes maquetas, las estructuras inmobiliarias y las fuerzas económicas levantaban con una concepción extraordinaria la «casa-barrio», preámbulo acotado de la moderna ciudad capitalista y su división espacial.

El «inmueble-mixto», construcción de diversos usos (vivienda, comercio e industria), absorbería las funciones de urgencia y las necesidades de la vida cotidiana. La adición de estos «inmuebles-mixtos» formalizaría una tipología muy clara: el barrio. La zona o barrio acotaría de forma muy precisa lo que podríamos llamar las estructuras secundarias de la ciudad. El barrio, como lo reseña Aldo Rossi, se explica «con un criterio social, fundado en el principio de la división o segregación de clases y en las funciones económicas»; es en definitiva un modo concreto de vida urbana.

La tipología constructiva, tan diversa en calidades («casa de lujo», «buena construcción», «edificación con materiales nobles», «vivienda social», «vivienda subvencionada») como en precios («su piso por 1.800 pesetas al mes», «viva con el prestigio que usted merece», «pisos desde 4.000.000 de pesetas») serían los factores básicos del diseño. El valor del suelo y calidad constructiva definen el diseño-vivienda y su ordenación. Una segregación económica perfectamente acotada alojaría al usuario en los barrios. Su paisaje urbano estaba controlado por sus recursos económicos.

El uso del suelo

CUALQUIER análisis morfológico, por superficial que sea, nos lleva a la conclusión de que la alteración del paisaje urbano, la mutación que experimenta el territorio, la adulteración que sufre la calle o el barrio está provocado por una fuerza esencialmente económica. El uso del suelo, que ha favorecido un urbanismo como el que se ha llevado a cabo en nuestro país, ha sido un uso en pro de los intereses patrimoniales privados. La Ley del Suelo, generosa y ambiciosa redacción en pro de un uso racional del territorio, no ha dejado de ser una abstracta idealización, una compleja legislación, retórica en su contenido e ineficaz a la hora de hacer de ella un arma de control del suelo. Nuestras ciudades son hoy el producto de la ambición y la codicia de unos intereses cuya dinámica ha configurado la crueldad formal de nuestro entorno. La propiedad de la tierra y la capacidad de especulación que se le ha planificado ha configurado la realidad urbana que habitamos; el uso del suelo urbano ha sido una fuente de creación de riqueza para unos concretos y determinados intereses.

Pero un acercamiento crítico sólo desde sus aspectos éticos, con ser muy importante, o de sus análisis morfológicos, con ser muy desoladores, no definen ni nos acercan a una interpretación científica sobre

las fuerzas que transforman la ciudad. Es éste un aspecto de estudio necesario sobre los fenómenos de destrucción del tejido urbano aún sin realizar. La ciudad no se destruye únicamente por las decisiones de algunos especuladores. El crecimiento de la ciudad se encuentra bajo una presión constante de los «capitales en conjunto»; es una presión de naturaleza social, con una gran dinámica y movilidad de acción y que estará siempre dispuesta para orientarse allí donde exista una opción de inversión.

Basta observar en el desarrollo urbano de la década 60-70 para poder comprender cómo el deterioro de la forma urbana salta los límites naturales de la ciudad, para conquistar el territorio e iniciar la especulación del suelo regional con el uso del suelo en la denominada «residencia secundaria» o la degradación de nuestras costas con la especulación inmobiliaria del turismo.

La gestión sociopolítica

LAS fuerzas sociopolíticas que se enfrentan con el deterioro y la planificación del medio ambiente tratan de paliar sus efectos desde diversas motivaciones, según los frentes de acción que la degradación urbanística les ofrece. En nuestro urbanismo de posguerra (fenómeno con diferentes matices acaecido en otros países) podemos observar tres apartados tipológicos en la planificación urbanística: la década 1945-55, englobada en una «urbanística-arquitectura»; la década 55-65, englobada en lo que pudiéramos denominar «urbanística-planning», y el período 65-70, con las nuevas expectativas introducidas por el nuevo relevo ministerial, que se podría adscribir a una «urbanística tecnológica-administrativa».

En el primer apartado, la gestión sociopolítica del urbanismo se realizaba trasladando parámetros funcionales, muy afines a la ideología del movimiento moderno en arquitectura; la planificación funcional aparecía como sucedáneo, tipologías formales importadas de soluciones urbanísticas que surgían en una realidad muy distinta a la nuestra, como lo fueron los modelos nórdicos. Las propuestas respondían a un uso del suelo más generoso, densidades de población bajas y un diseño arquitectónico entroncado con el estado artesanal de nuestra economía. Urbanismo que ha dejado algunos ejemplos de rigor, pero cuyos modelos y experiencia no significaron nada, pues las fuerzas que decidían y configuraban sus propuestas formales arrancaban de otros intereses que aquellos que propugnaban estos modelos.

El segundo apartado, el «planning», dinamizaba un urbanismo con un bagaje más aparentemente riguro-

so, donde al arquitecto y a la urbanística se les investía de la responsabilidad de una síntesis, pero sólo programática y formal, porque ni siquiera sus modelos tenían opción a introducirse como imágenes dialécticas en el proceso constructivo de la realidad urbana. Sus canales más operativos, o al menos los que aparecen como tales en la historia de esta década, estaba en manos de los municipios. La desnaturalización de estos organismos facilitaba una instrumentalización para los intereses patrimoniales privados. El día que se historie la gestión de los administrativos, técnicos y ejecutivos municipales se podrá explicar cómo estos mecanismos estatales han sido los primeros en boicotear, de forma consciente o inconsciente, admitamos la simplicidad del juicio, las premisas de un urbanismo que intentaba jugar su papel ideológico.

En cuanto al tercer apartado, iniciado en su fase previa y en la actualidad en un proceso de concienciación, la instrumentalización para una gestión urbanística en el binomio «tecnología-administración», tendrá que abordar sin el menor rodeo una apertura crítica, una nueva «estructuración de los municipios», saneando sus cuadros desde sus niveles gestores, técnicos y ejecutivos, abrir los cauces a una política de «planificación regional», iniciar y realizar una ruptura con los cánones de un urbanismo paternalista que ha sustentado la política urbanística en las dos décadas anteriores.

La «praxis» urbanística que ejercita este apartado de política urbana se apoya en los aspectos primarios de una sociedad de producción —opulenta— y su visión estratégica acomete aquellos factores que han favorecido e ignorado sus dos fases precedentes. Las dos décadas anteriores han mantenido una planificación eminentemente especulativa, ignorando los «standards». Los «standards» diseñados por la «ideología neoliberal» de los años 65-70 son «standards» de la libre competencia, promovidos por el capital financiero y básicamente lucrativos.

La crítica radical y teórica —es decir, científica— que necesitaría esta nueva orientación no podrá formularse, porque en nuestros días es imposible formular una crítica científica a una política urbanística dirigida desde el Estado, ya sea éste un Estado de clase o un Estado que pretende gobernar burocráticamente la sociedad.

Hacia un diseño de sistemas crecientes

LAS dos décadas del urbanismo en nuestro país —45-55 y 55-65— se caracterizaron de una forma genérica por un diseño que pudiéramos denominar de

conurrencia, planificación y diseño de matiz eminentemente capitalista, donde la utilización de las contradicciones básicas genera un tipo de modelos impuestos al mercado. Su camino es lento. Sólo en sus últimos periodos, donde agotado cierto tipo de mercado necesita promocionar nuevos modelos, intenta renovar la imagen. El diseño que se suscitará en los próximos años, y que favorecerá la intervención económica del Estado, que actúa como potencia económica en colaboración con la iniciativa privada, los promotores y el capital financiero, ha de ser un diseño que podemos encuadrar en una terminología provisional, de diseño de sistemas crecientes.

Un diseño que aspira a una organización autónoma, diseño favorecido por el capital de Estado, y que tratará de formular desde sus instrumentos burocráticos administrativos (Ministerio de la Vivienda, Instituto Nacional de la Vivienda, Direcciones Generales) unas operaciones de acción global en materia de política urbana, pero que por ser instrumentos de una estructura caracterológica de procesos anteriores ofrecerá graves resistencias y su mecanismo de acción será difícil de poder promover una planificación y diseño de autodeterminación, diseño que ha de favorecer desde el binomio tecnología-administración una revisión del los «standards» que formule ya la iniciativa privada en su período anterior. La política de vivienda a escala nacional es evidente que sólo la podrá abordar desde una tipología del «standard». Desde unos prototipos seriados, normalización y estandarización, proceso organizativo y productivo que entra de lleno en un campo de dudosos resultados en lo que se ha dado en llamar «el terrorismo anónimo del medio ambiente».

La empresa privada, los promotores y el capital financiero necesitan crear nuevas imágenes y promocionar nuevos mercados: erotismo, juventud, nuevas formas de familia; los «géneros de vida» tienden a ser sustituidos por «niveles de vida». Nuevas fórmulas de venta con un carácter aparentemente cooperativista; el lucro no aparece como dato, pero permanece como realidad; diseño de gran énfasis sociológico, de aparente elocuencia formal, diseño que favorecerá una cierta imagen de cancerización del objeto arquitectónico; a niveles urbanísticos se concibe el fragmento urbano como una macro-arquitectura, ofreciendo un mistificado control global, sólo aparente, de las necesidades de la vida cotidiana.

Las propuestas de opción de una economía liberadora, como parece destacarse de ciertos planos políticos, tendrá que enfrentarse con un «capitalismo centralista» de difícil desarraigo; el «absentismo capitalista» necesitará de nuevos y reales estímulos para su incorporación a promocionar sus intereses.

Sobre los rescoldos de una planificación centralista como la realizada en nuestro país se hará necesario casi improvisar una planificación de «urgencia regional», para que los modelos de planificación indicativos —los llamados planes de desarrollo— puedan ofrecer una planificación más coherente y menos

anárquica, pues el diseño realizado no ha sido nunca planificado.

Las garantías crediticias al liberalismo industrial individualista ha desarrollado un diseño y una planificación industrial caótica y anárquica. Se acometió un problema tan complejo con unos modelos fundamentalmente franceses, cuyas características teóricas y sus supuestos de actuación estaban muy lejos de nuestra realidad social y económica. Se desarrolló un aparente diseño territorial mediante la aplicación de esquemas urbanos. La infraestructura viaria de las carreteras nacionales que servía de red de alimentación para las nuevas planificaciones industriales, vivienda e industria, ha crecido en una promiscuidad verdaderamente alarmante.

La tipología formal que ha desarrollado estos modelos indicativos es tan caótica como la formulada por el turismo especulativo en nuestras costas. No ha existido ni siquiera una planificación efectiva de las inversiones. La experiencia que nos muestra las proposiciones del liberalismo económico en nuestro país es elocuente. Ha sido totalmente incapaz de ofrecer unas soluciones mínimamente satisfactorias al problema de la construcción de viviendas, a la planificación de un turismo habitacional, a una industria de incipientes recursos. Ha dejado hipotecado nuestro paisaje urbano, regional y territorial con chabolismo en altura, agresivo y disperso, tantas veces delictivo, en beneficio de unos intereses tan privados que han utilizado el patrimonio del territorio nacional como coto cerrado de su vasallaje lucrativo.

El Estado intentó remplazar, en una competencia que nunca debió haber surgido, a la empresa privada que fracasó, como respuesta a unos problemas que nunca tuvo intención de ofrecer soluciones. La política estatal en materia de urbanismo fue vacilante, con una doctrina poco coherente, y sus resultados han sido contradictorios. Cualquier opción de política urbanística que quiera remediar el caos que la iniciativa privada ha favorecido, deberá acometerlo desde una planificación económica, con todo el valor que una propuesta rigurosa lleva implícita, incluso el de la desamortización de la propiedad privada de la tierra, porque el Estado moderno, si quiere subsistir, no podrá dejar de controlar esas «fuerzas equívocas» del liberalismo económico, que garantizan a la propiedad privada los usos, abusos y funciones de la planificación del entorno.

Por supuesto que no se trata —como ha escrito Claude Schaidt en un estudio sobre la prefabricación— del tipo de planificación elaborada por burócratas y dictada por intereses de grupos poderosos y clandestinos, sino de una planificación real y democrática, cuyo criterio sea la satisfacción de las necesidades de la sociedad.